

LA LUCHA POR EL PODER MILITAR

EDUARDO L. DUHALDE

El 24 de marzo se cumplieron dos años de la instalación de la dictadura militar en la Argentina. Ocho mil personas directamente asesinadas, otras 20.000 secuestradas por las Fuerzas de seguridad —la mayor parte muerta en los campos de concentración tras inenarrables torturas— y 10.000 presos políticos en las cárceles "oficiales", junto a la pérdida del 65 por 100 del poder adquisitivo de los salarios y la total supresión de las libertades públicas y los derechos constitucionales, es el salto trágico y visible del régimen militar argentino.

Sin embargo, estas cifras, que por su dramaticidad y elocuencia resultan incontestables, hacen que la mayor parte de los análisis en torno a la realidad argentina queden sólo en su evidencia, sin explicar las causas de este terrorismo de Estado, haciendo aparecer a los militares que gobiernan como irracionales o arbitrarios en su crueldad, al modo de esos tiranuelos de republiquetas, tan expresivamente descritos en la literatura latinoamericana. Se omite así la racionalidad del proyecto represivo ejecutado por el conjunto de las Fuerzas Armadas argentinas, el inocultable apoyo que reciben del Pentágono y el papel que juegan las multinacionales en su respaldo.

También se suele omitir una variable fundamental para comprender la situación argentina: la lucha por el poder que agita a la cúpula militar. Los enfrentamientos entre el general Videla a la cabeza del Gobierno y del Ejército de Tierra con los otros dos integrantes de la Junta; el almirante Massera y el brigadier Agosti, es decir, con las Fuerzas de la Marina y la Aeronáutica. Pero los aprestos de guerra con Chile por el control del canal de Beagle, la reciente masacre de prisioneros en la cárcel de Villa Devoto y el plan político de sucesión presidencial, no son ajenos a esta lucha por el poder, que hoy ha dejado de ser oculta y sorda para adquirir expresión pública.

La racionalidad del terror

El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas salieron a la calle para ocupar la vacante de poder producida por el deterioro a todos los niveles del Gobierno de Isabel Perón. Fundamentalmente, por el convencimiento del fracaso del peronismo en lo que había sido la razón de ser del acuerdo para el retorno de Juan Domingo Perón a la Argentina; la utilización del peso histórico del peronismo y del carisma de su líder para lograr el apoyo, o al menos la no beligerancia, de la clase obrera argentina, a las políticas económicas que desde hace dos décadas orienta el Fondo Monetario Internacional y el capital monopolístico.

Tras el fracaso del peronismo, no quedaba ningún dique de contención política a los reclamos crecientes de los trabajadores argentinos. La agudización de la lucha de clases ponía en tela de juicio la supervivencia del modelo capitalista dependiente, cuya crisis estructural, precisamente, hace que la rentabilidad de las empresas sólo sea posible de asegurar en base a un constante abaratamiento de la mano de obra, es decir, en base a una cada vez mayor superexplotación.

Esa clase obrera, con una larga tradición de lucha, con niveles de conciencia y organización crecientes hasta el punto de convertirse en un obstáculo insalvable para cada uno de los Gobiernos que se sucedían, exigía, según los militares argentinos, una operación de cirugía, que asegurara la estabilidad del sistema capitalista. Los dos años de terror, con su secuela

interminable de asesinatos y torturas, no son sino la aplicación fría y planificada del proyecto de exterminio de la militancia política y de los sectores más activos y de vanguardia de la clase obrera, tendente al dominio y sometimiento del conjunto de los trabajadores. Cada acto de terror tiene su explicación, ya sea en el efecto directo de la víctima eliminada, o en el poder simbólico que el crimen adquiere. Como ejemplo de esto último señalemos que el asesinato de familias enteras o el habitual secuestro de los familiares de los perseguidos, tiende a crear la imagen de que el militante político pone en riesgo de muerte a su familia y, por ende, ésta debe repudiarlos y aislarlos, o mejor aún, denunciarlos, como forma elemental de protección.

Por supuesto, colocar todo el aparato del Estado, a través de las Fuerzas Armadas, en función represiva, produce "excesos" o víctimas no queridas. Pero la forma descentralizada adoptada, en base a comandos innominados, a su vez, garantiza que los intereses particulares —el amigo o pariente militar, por ejemplo— no puedan obstaculizar la efectividad

de la acción, ya que resulta difícil saber en cada caso qué regimiento, brigada o sección policial ha sido la encargada de ejecutarla.

El proyecto económico de la dictadura

Sería ingenuo pensar que todo este río de sangre racionalmente planificado, no tenga como sustento un proyecto económico tan racional como su faz de exterminio. Por eso, no cabe hablar de "caos", pese a que hoy la Argentina presenta un cuadro económico recesivo que se evidencia en la retracción de la producción industrial, síntomas de creciente desempleo, caída vertical de la producción de trigo, proliferación de quebrantos comerciales, cierres de fábricas y persistente inflación.

Desde el 2 de abril de 1976 hasta la fecha, el Ministerio de Economía ha sido ejercido con plenos poderes por José Alfredo Martínez de Hoz, miembro de una de las más importantes familias terratenientes y, a la vez, ligado a diversos sectores del capital internacional, entre ellos a la ITT, Esso, Siemens y la Banca Morgan. Su plan económico, ejecutado a rajatabla, en lo sustancial se propone la superexplotación obrera y la concentración de la actividad económica mediante la liquidación de la pequeña y mediana empresa agrícola, industrial y de servicios, desarrolladas en la Argentina, sobre todo a partir de 1946, a impulsos de la expansión del mercado interno y beneficiada por la tasa de interés bancario negativa.

El plan económico de la Junta Militar, por tanto, necesita muchos damnificados y muy pocos socios beneficiarios. Es que el programa de Martínez de Hoz subordina la resolución de





José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía, hombre ligado a sectores del capital internacional como la ITT, ESSO, SIEMENS y la Banca Morgan.

las cuestiones coyunturales a objetivos estratégicos a largo plazo, en el intento de aceleración de la concentración de la actividad económica, que necesariamente debe expresar la hegemonización del bloque de poder burgués—hoy fracturado— por la santa alianza de las burguesías terrateniente, industrial monopólica y financiera. Todos los sectores sociales y económicos que trascienden ese estrechísimo marco, por tanto, son virtuales enemigos de este propósito de reconversión. Precisamente, quienes constituyeron la base social y política que posibilitó el golpe militar, son parte de sus víctimas.

Ya no sólo, como es habitual, la clase obrera y otros sectores populares deben cargar sobre sus espaldas el peso de la crisis, sino que importantes sectores de la burguesía media sufren un proceso acelerado de pauperización, sometidos a una ley de acero: la de la concentración capitalista, en favor del capital monopólico agrario, industrial y financiero, asociados privilegiados del imperialismo. Estos sectores son los que han obtenido buenos dividendos del plan, cuya aplicación es posible hasta ahora, mediante el más feroz terrorismo de Estado. En 1976, por ejemplo, el aumento de los precios de la producción animal fue del 722 por 100, lo que arrastró los precios de otros productos alimentarios. Las altas tasas de interés en el mercado financiero—oscilan alrededor del 170 por 100 anual acumulativo—sobrepasan el ritmo inflacionario (en 1977 fue del 140 por 100) y no sólo significan una importante renta para sus beneficiarios, sino que es la llave maestra para la concentración de propiedad y de la actividad económica.

Los resultados de esta política están a la vista: la industria funciona a un 50 por 100 de su capacidad, y en muchas fábricas se trabaja sólo tres días a la semana. Las grandes avenidas comerciales de Buenos Aires y otras ciudades importantes muestran miles de comercios cerrados por desalojo, quiebra o cierre.

La respuesta obrera

A pesar de la cruel represión, la protesta y los reclamos crecientes de los trabajadores, ponen en evidencia que dos años de dictadura no han logrado someter y quebrar a la clase obrera argentina. Por el contrario, la ola de huelgas desatadas a partir del mes de octubre y que no han decrecido pese a los meses de verano con las vacaciones forzosamente impuestas, han puesto al descubierto la debilidad estructural de la dictadura de Videla, sostenida por la violencia de sus armas, pero inermes cuando éstas son rebasadas por la protesta colectiva, para responder a las necesidades mínimas de los asalariados.

A su vez, quedaron en evidencia las contradicciones del bloque de poder, apremiado por el peligro de un estallido social de consecuencias imprevisibles y por su propia incapacidad de superar la situación límite económica en que se encuentra.

La característica esencial de casi todos los conflictos obreros es su espontaneidad. Se desarrollan, en general, sin dirección sindical, o en ciertos casos, desbordando a los propios dirigentes. Los conflictos, además, están motivados básicamente por reivindicaciones salariales, es decir, que no cuentan con un fundamento político generalizado ni son el resultado de una decisión coordinada, impedida por el control militar. Sin embargo, ello no les quita el ser un desafío poco menos que heroico al aparato represivo y un objetivo cuestionamiento político a la dictadura militar.

La lucha por el poder

El día 16 de marzo, el general Videla logra en una reunión de más de noventa generales en actividad del Ejército argentino, la aprobación de su plan político, consistente en la incorporación de un "cuarto hombre" a la Junta Militar, precisamente quien desempeñará la presidencia de la República e integrará la



Jorge Rafael Videla protagoniza hoy una lucha por el poder que, si cabe, ha hecho que la represión se acentúe más en Argentina.

Junta acompañado por los comandantes en jefe de las tres Fuerzas Armadas.

Hasta ahora, Videla ejercía la presidencia de la nación en su carácter de Jefe del Ejército. Las insistentes presiones de la Marina y de la Aeronáutica, primero por desdoblarse ambos cargos, y luego por dar por finalizados los mandatos de los actuales comandantes de las tres Armas—tendientes a que Videla pasara a retiro y resignara, por tanto, la jefatura del Ejército en la cual sustenta su derecho a ser presidente—han motivado el citado "plan político".

De acuerdo al mismo, que fue hecho público sin esperar la conformidad de la Marina y la Aeronáutica, el 1 de octubre de 1977, se renovarían los comandantes en jefe y Jorge Rafael Videla pasaría a ocupar el cargo de Presidente, sin ostentar ya la jefatura directa de su Arma.

Esta decisión no es más que un nuevo episodio en la lucha por el poder. Nadie ignora las apetencias de Massera para suceder a Videla en el cargo de Presidente, ni tampoco que este recambio no está generado sólo en las ambiciones personales del almirante, sino que es alentado por los sectores económicos que apoyaron el golpe militar y hoy forman parte de sus víctimas. Así, Massera, de ser el hombre duro de la Junta, ha pasado a ser—en la imagen externa que se pretende proyectar—el hombre preocupado por una salida institucional, portador de un proyecto sedicentemente populista, dispuesto a atraer tras sí a la burocracia sindical peronista, a los sectores económicos desarrollistas y a buena parte de los partidos políticos desesperanzados de contar con una participación mayor en el proyecto de Videla.

Sin embargo, la viabilidad de este proyecto no encuentra su mayor escollo en la aparente

unidad del Ejército de Tierra; tiene un reparo mayor: Videla-Martínez de Hoz siguen contando con el respaldo de Estados Unidos. Así lo demuestran todos los actos de la Administración Carter, pese a la crítica en torno a "las constantes violaciones de los derechos humanos", más dirigidas a corregir "excesos" de la Junta Militar que a promover un cambio de hombres y de políticas. En consecuencia, Estados Unidos tampoco está dispuesto a tolerar un enfrentamiento interno que pueda debilitar la situación militar en Argentina.

Recientemente, el general S. Brown, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ha hecho reveladoras declaraciones ante el Senado de su país, de cuál es la opinión del Pentágono con respecto a las dictaduras militares que oprimen y asolan el "cono Sur" de América. Ha dicho que "los militares latinoamericanos tienden a ser el sector más coherente y activo de la región", agregando, tras elogiar su papel en la defensa del hemisferio, que: "continúan existiendo relaciones amistosas entre los militares norteamericanos y los militares latinoamericanos, debido al papel excepcional que desempeñan los mismos, resultando importante que fortalezcamos esas tradicionales relaciones, atendiendo las legítimas necesidades de modernización de sus Fuerzas Armadas".

La cuestión de Beagle

De allí la firme posición de Estados Unidos, descartando toda posible solución del diferendo del canal de Beagle por medio de un enfrentamiento armado entre Argentina y Chile. La cuestión del Beagle, en realidad, es un lejano y apagado conflicto de límites de casi cien años de tramitación, que si bien tiene actualidad en virtud de haberse dictado un laudo arbitral en mayo de 1977, su agitación virulenta con apresto de guerra entre ambos países, respondió fundamentalmente a la lucha interna por el poder a ambos lados de los Andes. Pinochet, cuestionado dentro de la propia Junta Militar chilena tras su farsa de plebiscito, y Massera, buscando consolidarse en su enfrentamiento con Videla, alontaron de todas maneras el enfrentamiento. Así, el dictador chileno obligó a posponer las críticas y cuestionamientos de que era objeto, al aparecer como intransigente defensor de la soberanía nacional, y por su parte, el jefe de la Marina argentina, con su agresiva respuesta movilizándolo la flota de mar y haciendo aprestos de combate, trató de mostrarse como el hombre fuerte de la Junta argentina frente a un Videla vacilante en la defensa del "honor, la dignidad nacional y el suelo patrio".

La indiferencia de ambos pueblos, el argentino y el chileno, acompañó a toda esta parodia sin más rédito que el señalado, entre dictaduras hermanadas en sus proyectos de sometimiento y explotación.

La masacre de Devoto

El día 14 de marzo, en plena ciudad de Buenos Aires, la Junta Militar producía uno de sus mayores crímenes colectivos, con la excusa de un amotinamiento en la cárcel de Villa Devoto. La desproporcionada y brutal represión sobre los prisioneros, a punta de metralla—también se disparaba desde helicópteros a las ventanas de la cárcel—, arrojó un saldo de víctimas entre presos políticos y comunes que superan los 200 muertos, aunque la Junta Militar ha reconocido sólo 60. La mayor parte de las bajas fueron ocasionadas por las armas de fuego de los carceleros y de las fuerzas militares atacantes—circunstancia negada en los informes oficiales— y las restantes por asfixia y quemaduras, tras el incendio de uno de los pabellones carcelarios.

Esta monstruosa masacre, cuyo relato excede los límites de esta nota, ya fuera concebida por el sector de Videla para reafirmar su autoridad con un acto brutal de represión, o por Massera para desacreditar al Ejército y a Videla ante los ojos del mundo, lo cierto es que la lucha por el poder entre los militares se lleva adelante acumulando centenares de nuevas víctimas populares. ■